El expedientado responde al requerimiento que el Inspector le hace en Acta 000663/00 de presentar el Libro de Reclamaciones, pero no aporta, en ningún momento del procedimiento, prueba en contrario que acredite la no comisión de la infracción que se le imputa por incumplimiento de los arts. 2 y 5.1 del Decreto 171/89, de 11 de julio, y art. 34.10 de la Ley 26/34.

Tercero. Respecto a la falta de motivación en la Resolución recurrida, (alegación 2.^a), consideramos que la exigencia de motivación de los actos se cumple de conformidad con el art. 20.2 del R.D. 1398/93 y el art. 54 de la Ley 30/92, con sucinta referencia de Hechos y Fundamentos de Derecho.

Es constante Jurisprudencia -traída del término "sucinta" que la motivación no exige una argumentación extensa, bastando con que sean "racional y suficiente", y contenga una referencia adecuada a los hechos y fundamentos jurídicos, siendo bastante, en su caso, la motivación remisoria a otros documentos o informes obrantes en el expediente, (Sentencias de la Sala 3.^a del TS de 19 de enero de 1974, 24 de septiembre de 1993, 28 de junio y 10 de diciembre de 1996, 3 de junio de 1997 ...), todas ellas acordes con la STC 122/1994).

La Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de enero de 1996, sostiene que por motivación sucinta "ha de entenderse la ceñida al mínimo exigido para que sus destinatarios conozcan y sepan los fundamentos que tuvo en cuenta el órgano administrativo resolutor para producir el acto revelador de su voluntad administrativa".

Cuarto. De la existencia en el expediente de la reclamación de doña M.^a Isabel Muñoz Gutiérrez y del Acta que deja constancia de la no disponibilidad del Libro de Reclamaciones al efectuarse la visita inspectora, a lo que se suma la ausencia de prueba en contrario por parte del expedientado de haber puesto a disposición del consumidor el Libro de Reclamaciones cuando lo pidió, se desprende la negativa a facilitar la Hoja de Reclamaciones.

Quinto. Por último, la recurrente alega, ausencia de culpabilidad. En el derecho administrativo sancionador rige el principio de culpabilidad, recogido como uno de los inspiradores de la potestad sancionadora por el art. 130.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, si bien hay que matizar respecto a dicha afirmación que para responder de las infracciones administrativas basta que las personas que sean responsables de las mismas lo sean aún a título de simple inobservancia (además de por dolo, culpa o negligencia): "Sólo podrán ser sancionados por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de los mismos aún a título de simple inobservancia".

Sexto. Vistos la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios; la Ley 5/1985, de 8 de julio, de los Consumidores y Usuarios en Andalucía; el R.D. 1945/83, de 22 de junio, por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agro-alimentaria; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás disposiciones concordantes y de general aplicación, esta Secretaría General Técnica

RESUELVE

Desestimar el recurso de alzada interpuesto por don Félix Acuyo Bas, como titular del establecimiento "Tejidos La Milagrosa" contra la Resolución de la Delegación del Gobierno en Almería, de fecha 10 de abril de 2001, en consecuencia mantener la misma en sus propios términos.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación o publicación, ante los correspondientes órganos judiciales de este orden, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Sevilla, 25 de septiembre de 2002. El Secretario General Técnico. P.D. (Orden 18.6.01). Fdo.: Rafael Cantueso Burguillos.

Sevilla, 18 de noviembre de 2002.- El Secretario General Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

RESOLUCION de 18 de noviembre de 2002, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica la adoptada por el Consejero de Gobernación al recurso de reposición interpuesto por don Carlos García Pereira, contra la que resolvía el recurso de alzada recaída en el Expte. H-97/99.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal al recurrente don Carlos García Pereira, de la resolución adoptada por el Consejero de Gobernación al recurso administrativo interpuesto, por la presente se procede a hacer pública la misma, al no haberse podido practicar en su domicilio, reproduciéndose a continuación el texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación de esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla), pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su identidad.

«Visto el recurso de reposición interpuesto por don Carlos García Pereira, actuando como titular del establecimiento "Mesón Al Andalus", contra Resolución de la Consejería de Gobernación, de fecha 29 de abril de 2002, recaída en expediente H-97/99,

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Don Carlos García Pereira, actuando como titular del establecimiento "Mesón Al Andalus", presenta recurso de reposición contra la resolución antes citada, que acordó desestimar el recurso de alzada interpuesto contra resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo e Industria de Huelva, de fecha 6 de marzo de 2000.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Secretaría General Técnica es competente, por delegación del Consejero, para conocer y resolver el presente recurso, a tenor de lo dispuesto en los artículos 116.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 39.8 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación con el Decreto del Presidente 6/2000, de 28 de abril, sobre reestructuración de Consejerías; el Decreto 138/2000, de 16 de mayo, por el que se aprueba la Estructura Orgánica de la Consejería de Gobernación, modificado por Decreto 373/2000, de 16 de mayo, y la Orden de 18 de junio de 2001, por la que se delegan competencias en diversas materias en los órganos de la Consejería.

Segundo. El escrito calificado como recurso potestativo de reposición no es tal, al amparo del art. 115.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, porque contra la resolución de un recurso de alzada no cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión en los casos establecidos en el art. 118.1, quedando expedita la vía contencioso-administrativa.

De otra parte y aun intentando la aplicación del art. 110.2 de la misma Ley, calificando el escrito como recurso extraordinario de revisión, de conformidad con el art. 118.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, el escrito presentado no reúne las condiciones para su tramitación como recurso extraordinario de revisión, en consecuencia también procede inadmítirlo a trámite por esta causa, de conformidad con el art. 119.1 del mismo texto legal.

Tercero. Vistos la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios; la Ley 5/1985, de 8 de julio, de los Consumidores y Usuarios en Andalucía; el R.D. 1945/83, de 22 de junio, por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agro-alimentaria; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás disposiciones concordantes y de general aplicación, esta Secretaría General Técnica,

RESUELVE

Inadmítir a trámite el recurso de reposición interpuesto por don Carlos García Pereira, actuando como titular del establecimiento "Mesón Al Andalus", contra Resolución de la Consejería de Gobernación, de fecha 29 de abril de 2002, recaída en expediente H-97/99.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación o publicación, ante los correspondientes órganos judiciales de este orden, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Sevilla, 15 de julio de 2002. El Secretario General Técnico, P.D. (Orden 18.6.01), Fdo.: Sergio Moreno Monrové.»

Sevilla, 18 de noviembre de 2002.- El Secretario General Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

RESOLUCION de 18 de noviembre de 2002, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica la adoptada por el Consejero de Gobernación al recurso de alzada interpuesto por don Manuel Moreno Porras, en representación de Apartamentos La Solana, S.A., contra la dictada por el Delegado del Gobierno en Almería, recaída en el Expte. 189/2000.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal al recurrente Apartamentos La Solana, S.A., de la resolución adoptada por el Consejero de Gobernación al recurso administrativo interpuesto contra la dictada por el Delegado del Gobierno en Almería, por la presente se procede a hacer pública la misma, al no haberse podido practicar en su domicilio, reproduciéndose a continuación el texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación de esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla), pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su identidad.

«Visto el recurso de alzada interpuesto por don Manuel Moreno Porras, actuando en nombre y representación de la entidad Apartamentos La Solana, S.A., contra la Resolución de la Delegación del Gobierno de Almería, de fecha 2 de febrero de 2001, recaída en el expediente sancionador 189/2000, instruido por infracción en materia de protección al consumidor, resultan los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El Delegado del Gobierno en Almería dictó la Resolución de referencia, por la que se impone a Apartamentos La Solana, S.A., una sanción de trescientos euros con cincuenta y un céntimos (300,51 euros), es decir, cincuenta mil pesetas (50.000 ptas.), como responsable de una infracción calificada de leve sancionable en el artículo 34.10 de la Ley 26/84, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y artículo 3.3.6 del R.D. 1945/83, de 22 de junio (BOE de 15.7), por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agro-alimentaria en relación con los artículos 2 y 5.1 del Decreto 171/89, de 11 de julio, por los siguientes hechos: "La expedientada no puso a disposición de la reclamante doña Olga Entrena Pérez el libro de hojas de quejas y reclamaciones debidamente numerado y sellado."

Segundo. Contra la anterior Resolución, don Manuel Moreno Porras, actuando en nombre y representación de la entidad Apartamentos La Solana, S.A., interpone recurso de alzada, en el que reitera las alegaciones del escrito anteriormente presentado. Manifiesta, en síntesis:

- Lo ocurrido fue motivado por un reciente traslado de oficina.
- Reconoce que no pudo encontrarse el libro.
- Buena fe en su actuación.

A los anteriores hechos les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Primero. Esta Secretaría General Técnica es competente, por delegación del Consejero, para conocer y resolver el presente recurso, a tenor de lo dispuesto en los artículos 114.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 39.8 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación con el Decreto del Presidente 6/2000, de 28 de abril, sobre reestructuración de Consejerías; el Decreto 138/2000, de 16 de mayo, por el que se aprueba la Estructura Orgánica de la Consejería de Gobernación, modificado por Decreto 373/2000, de 16 de mayo, y la Orden de 18 de junio de 2001, por la que se delegan competencias en diversas materias en los órganos de la Consejería.

Segundo. El recurrente está legitimado para la interposición del presente recurso, conforme a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.